

Fallo de la Cámara Federal*

- Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 26/4/2005 - “Colegio de Escribanos de Entre Ríos c/ PEN (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Unidad de Información Financiera) - acción de inconstitucionalidad”.

Texto completo

///raná, 26 de abril de 2005

Y Vistos:

Estos autos, caratulados: “Colegio de Escribanos de Entre Ríos c/ PEN (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - Unidad de Información Financiera) por acción de inconstitucionalidad”, Expte. n° 26-60107-14571-2005, provenientes del Juzgado Federal de la ciudad de Paraná y

Considerando:

I. Que llegan estos actuados a conocimiento de este tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 37 contra la resolución de fs. 32/33, que, en lo que aquí interesa, deniega la medida cautelar solicitada.

El recurso se concede a fs. 38, se expresan agravios a fs. 39/43 vta., quedando las presentes en estado de resolver a fs. 47.

II. Que el apelante se agravia y, en primer lugar, efectúa un relato de los antecedentes de la causa y destaca que su presentación, en modo alguno, se opone a la implementación por parte del Estado de las disposiciones legales tendientes a perseguir y condenar el lavado de dinero, sino, dice, que a lo que se opone es a que el Estado delegue en los escribanos fun-

ciones propias de investigación e instrucción penal, para lo cual no están preparados ni les corresponde efectuar. Indica que la resolución que impugna (Res. UIF n° 10/04) violenta el presupuesto básico de pautas objetivas establecidas por la Ley 25.246 y, por el contrario, apunta, establece pautas subjetivas que quedan al arbitrio, idoneidad, capacidad y experiencia del escribano y ello coloca a los mismos en la complicada disyuntiva de “informar todo” por las dudas o “de correr el riesgo de no informar aquello que consideran una ‘operación sospechosa’” o “de informar y que, investigada que sea la operación, ella no resulte ilegal y perder a sus clientes”. Disiente con el sentenciante en cuanto a la no arbitrariedad de la resolución puesta en crisis, puesto que, explica, no existen pautas o parámetros objetivos para calificar de “sospechosas” las operaciones que los escribanos deben denunciar y delega en ellos la investigación de esa sospecha, lo que, afirma, resulta abusivo y arbitrario. Cita jurisprudencia que avala su postura y solicita se revoque la decisión puesta en crisis y se conceda la medida cautelar solicitada.

a. Que el doctor Jorge H. Petric, en representación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Entre Ríos, ocurre a la jurisdicción mediante la promoción de una pretensión de inconstitucionalidad dirigida contra el PEN (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Unidad de Información Financiera –en adelante, UIF–), cuestionando los artículos 14, inciso 10, 20, inciso 12, 21 incisos b y c, de la Ley 25.246 y la Resolución n° 10/04 UIF; asimismo, solicita una medida cautelar de no innovar para que se suspendan los efectos de la susodicha resolución, todo

porque, según su criterio, se violentan los artículos 18 y 19 de la C. N.

Que el magistrado de la instancia *a quo* no hizo lugar a la medida cautelar solicitada y, para decidir como lo hizo, sostuvo, básicamente, que el acto administrativo que se impugna goza de presunción de legalidad y es ejecutorio, y no se advierte, *prima facie*, que el mismo sea arbitrario o manifiestamente ilegal. Contra dicha decisión, se alza el apelante.

b. Que, previo al análisis de los presupuestos de la medida cautelar denegada, corresponde sostener, en orden al examen relativo a su viabilidad en supuestos como el de autos, que medidas como la solicitada presuponen una respuesta jurisdiccional que de ordinario debe aplicarse con un criterio restrictivo, fundamentalmente tratándose de actos administrativos o legislativos.

Sin soslayar ese carácter excepcional y teniendo en cuenta la presunción de legitimidad que gozan en un principio, debe contemplarse el recaudo de peligro en la demora, en cuanto resulta ser grave e irreparable, resguardándose el interés público en su dictado.

Que, por su misma naturaleza, las medidas precautorias no exigen un examen de la certeza sobre la existencia del derecho invocado, sino solo su apariencia o verosimilitud de la existencia de peligro en la demora, de la fijación de contracautela y la imposibilidad de obtener satisfacción por otro medio procesal (art. 230 del C. P. C. y C.).

Ello a fin de evitar la posible frustración del derecho invocado, al observarse que resulta más beneficioso otorgarla que denegarla y que la sentencia definitiva que acoja la pretensión resulte inoficiosa o de

imposible cumplimiento, es decir, carezca de eficacia práctica.

c. Que el deber de informar a la UIF, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, impuesto a los escribanos, entre otros sujetos obligados, por el artículo 20 de la Ley 25.246 –Ley de Lavado de Activos de Origen Delictivo–, encuentra una razón de ser y es que ellos son verdaderos “agentes calificados”, por su posibilidad de obtener determinado tipo de información. La comunicación a las autoridades competentes de cualquier operación o actividad que pudiera estar utilizándose como vehículo para el blanqueo de capitales es, obviamente, la misión capital de las entidades colaboradoras. Efectuando tal comunicación y suministrando a dichas autoridades la información requerida, es como posibilita a estas tanto para prevenir el blanqueo, como, en último extremo, para combatir las actividades cuya represión se pretende (cfr. Álvarez Pastor, Daniel y Eguidazu Palacios, Fernando, *La prevención del lavado de capitales*, Madrid, Aranzadi, 1997, p. 184, citado por Gené, Gustavo Enrique, “Las unidades de información financiera [UIF]. Roles, funciones y riesgos”, publicado en el boletín de *La Ley* del lunes 18 de abril de 2005, pp. 1 y ss.).

Que, sin embargo, este deber de información no puede ni debe implicar el traslado a los obligados de funciones regulatorias, de contralor y supervisión que lucen *prima facie* como propias de los organismos de la administración pública y entidades descentralizadas o autárquicas cuya razón de ser consiste, precisamente, en cumplir esas funciones, pues, de lo

contrario, se desplaza la carga inherente de contralor hacia otros sujetos que desempeñan otro tipo de tareas, roles y funciones en la sociedad. Es menester, para evitar tal traslado, que las pautas o parámetros para la cooperación sean objetivos, claros y adecuados a la realidad interna del tráfico comercial y de los operadores que interactúan en el mismo.

Que, sin soslayar el estrecho margen cognitivo que, en esta instancia, le cabe al tribunal para analizar la pretensión de la actora, puede admitirse que se presenta en el caso la verosimilitud del derecho requerida para el dictado de medidas como la peticionada. Ello está dado, fundamentalmente, por el elástico y difuminado margen ponderativo que la norma en cuestión –Resolución n° 10/04 UIF, anexos I y II– acuerda a los obligados a denunciar, entre ellos, los escribanos públicos. Tales calificaciones emergen al valerse de conceptos jurídicos indeterminados, como, por ejemplo: “operaciones inusuales” o “sospechosas”, “vinculación justificada/injustificada”, “idoneidad y experiencia del obligado a informar”, entre otros (cfr. anexos I, punto IV, de la Resolución 10/04 UIF, disponible en www.mecon.gov.ar –Infoleg–), sin brindar mayores precisiones sobre tales términos y que funcionan como estándares de difícil aprehensión y cumplimiento, y podrían, a la postre, generar el traspaso de responsabilidades arriba cuestionado.

Que, a diferencia de lo que sostiene el *a quo*, el tribunal entiende que la verosimilitud del derecho del peticionante aparece *prima facie* acreditada y permite apartarse del principio general contenido en el

artículo 12 de la Ley 19.542, en atención a la particular reglamentación del deber de información aquí referenciado.

Que, en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación deducido y revocar el punto 2° de la resolución recurrida, debiéndose conceder la medida solicitada y suspender los efectos de la Resolución 10/04 UIF hasta tanto recaiga decisión sobre el fondo del asunto. Asimismo, deberá el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia prestar caución juratoria por todos los daños y perjuicios que la medida en cuestión pueda ocasionar (art. 199, C. P. C. C. N.)

Que, por ello, SE RESUELVE:

- 1) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el doctor Jorge R. Petric, en representación de la parte actora y, en consecuencia, revocar el punto 2° de la resolución recurrida, debiéndose conceder la medida cautelar solicitada y suspender los efectos de la Resolución 10/04 UIF, hasta tanto recaiga decisión sobre el fondo del asunto.
- 2) Disponer que la parte actora, a través de la persona de su presidente, preste la correspondiente caución juratoria por todos los daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida otorgada (art. 199, C. P. C. C. N.)
- 3) Oportunamente, continúen los autos según su estado.

Regístrese, notifíquese y bajen.

Se constituye el tribunal con los suscriptos, de conformidad con lo previsto por el artículo 109 del R. J. N. –vocal en uso de licencia–. *Guillermo J. Enderle - Gabriel B. Chausovsky.*

Nota

* El material de esta sección fue contribuido por la escribana Nelly A. Taiana de Brandi.